

VOLUMEN IX

LA UNIVERSIDAD NACIONAL Y LOS PROBLEMAS NACIONALES

Tomo III Política y Estado



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

MÉXICO 1979

V.	LA POLÍTICA INTERNACIONAL	227
	<i>Ponente</i> , César Sepúlveda	229
	<i>Comentarista</i> , Alonso Gómez Robledo	253
	<i>Comentarista</i> , Ricardo Méndez Silva	263
	<i>Comentarista</i> , Mario Ojeda	273
VI.	EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO	279
	<i>Ponente</i> , Julio Labastida Martín del Campo	281
	<i>Comentarista</i> , Enrique González Pedrero	337
	<i>Comentarista</i> , Juan Felipe Leal	383
	<i>Comentarista</i> , Lorenzo Meyer	391

Comentatista: LORENZO MEYER

NO HAY DUDA de que la ponencia de Julio Labastida representa un esfuerzo bien logrado de síntesis histórica de la vida política mexicana del siglo XX. Solamente después de rastrear y recrear con cierto detalle las principales fuerzas que han determinado la estructura política contemporánea, el autor considera que tiene bases para abordar el tema que está detrás de sus preocupaciones por el pasado, explicar la situación actual y descubrir algunos de los rasgos del futuro.

El análisis político siempre ha aspirado a lograr el rigor de las ciencias naturales y llegar a la formulación de predicciones. Personalmente creo que este empeño, comprensible y necesario, está destinado al fracaso, al menos por el momento. Hasta ahora, el análisis de lo político en el mundo académico ha sido en parte una actividad científica pero, en parte también, un ejercicio de especulación, ligado a las preferencias ideológicas de cada autor. En el mundo de la acción directa, los datos aportados por la "ciencia política" académica sólo pueden servir, en el mejor de los casos, como una guía parcial, insuficiente, que no permite dejar de lado al sentido común y a la intuición. La política sigue siendo en parte una disciplina científica y, en parte, un arte, en donde, a pesar de nuestro esfuerzo por perfeccionar los instrumentos de análisis, la "fortuna", como señalaba Maquiavelo, sigue teniendo la última palabra.

Las consideraciones anteriores me llevan a ser un tanto pesimista respecto a la capacidad que, como académicos y estudiosos de los fenómenos políticos, podemos tener para vislumbrar desde aquí los contornos del sistema político mexicano del futuro. La historia no es rica en ejemplos afortunados del poder predictivo del intelectual universitario; los hay, pero no son muchos. Sin embargo, y pese a ello, considero que el intento que nos reúne aquí es válido. Debemos dar nuestra visión de la naturaleza y posibilidades del sistema político nacional. A través de este tipo de esfuerzo de autoevaluación, la comunidad académica tiene la oportunidad de dejar constancia de cuáles fueron sus preocupaciones en torno a la vida política de nuestra sociedad. Al identificar obstáculos y metas se está dando, al mismo tiempo, una idea más o menos fiel de lo que es la vida social y de lo que debería ser; una visión del mundo que, esperamos, tenga algún efecto práctico, pues la Universidad es el paso obligado de la mayor parte de los líderes políticos del país.

La reconstrucción del proceso histórico contemporáneo, que hace Labastida, así como su diagnóstico del presente y proyecciones hacia el futuro, parecen tener como hilo conductor el tema de la participación política. ¿Quiénes participan como actores políticos?, ¿cómo?, ¿bajo qué forma?, ¿con

cuáles resultados? Para el autor, la característica central de la vida política de México la constituyen las restricciones que sistemáticamente se han levantado a la plena participación. Toda la vida política mexicana actual se encuentra permeada por la contradicción persistente entre una estructura jurídica formal de naturaleza democrática y una realidad que sistemáticamente la niega, empleando para ello una notable gama de métodos autoritarios.

El sistema político mexicano ha mantenido desde la Revolución hasta nuestros días una naturaleza autoritaria, es decir —siguiendo la definición de Juan Linz—, aquella propia de un sistema en donde las expresiones políticas del pluralismo social son limitadas sistemáticamente en beneficio de los intereses de quienes forman la cúpula del poder, aunque sin llegar a los extremos del totalitarismo. El juego político es limitado por la cúspide, pero no eliminado. En el caso mexicano se trata de un autoritarismo “ilegítimo”, pues la estructura jurídica proclama la existencia de un proceso político libre y pleno. No obstante esta contradicción —y así lo señala muy claramente el trabajo de Labastida— la efectividad del sistema es sorprendente, por lo menos hasta el momento.

La limitación en la participación se ha logrado —entre otras formas— empleando el poder del Estado, para que los liderazgos de las diferentes clases y fracciones de clases obedezcan básicamente a las directivas emanadas de la presidencia de la República. Es posible que los dirigentes de las diversas organizaciones puedan contar con el apoyo y lealtad de las bases —cosa por lo demás poco frecuente—, pero lo que es verdaderamente indispensable, para que puedan mantenerse y ser efectivos, es que se les reconozca como interlocutores válidos desde la cúpula del poder. La acción independiente es desalentada —básicamente a través de la desmovilización y la cooptación— o, en la última instancia, reprimida.

La estructura sectorial que se dio al partido oficial desde 1938, se convirtió en el eje de un sistema semicorporativo que organizó a todas las clases sociales o, más bien, a todos aquellos sectores de clase que estaban en posibilidad de ser organizados (campesinos, obreros, empleados, clase media y gran burguesía), en torno a un “proyecto nacional” delineado por el Estado e interpretado por el presidente de la República.

Antes de seguir adelante es conveniente hacer notar que el término corporativo, usado para calificar el sistema mexicano, debe emplearse con cierto cuidado y salvedades. El corporativismo clásico —totalitario— tiene como meta encuadrar a toda la sociedad dentro de las estructuras políticas. El mexicano no pretende tal cosa. La mayor parte de la población no pertenece a ninguna organización formal, y el encuadramiento es sólo el de la minoría. La mayoría de los mexicanos no son, en sentido estricto, actores políticos; están marginados y esto resulta funcional al sistema pues éste está basado en la desmovilización sistemática. Sólo los grupos importantes están encuadrados en este esquema. Labastida muestra que algunos de éstos surgieron de manera independiente e, incluso, con una actitud antagónica al poder constituido, como por ejemplo fue el caso de la COPARMEX, pero pronto tuvieron que enfren-

tar una disyuntiva: integrarse al esquema autoritario de participación política o verse obstaculizados, e incluso destruidos, por el poder del Estado.

El que todos los grupos políticos organizados y significativos estén sometidos a la disciplina impuesta por el régimen, no quiere decir que tal disciplina tenga el mismo sentido para todos. El objetivo de la organización semicorporativa de México persigue un doble objetivo: mantener el poder de la llamada "clase" o burocracia política heredera de los vencedores de la Revolución con todas las prerrogativas y prebendas que ello implica, a la vez que sostener un proceso acelerado de acumulación capitalista, que se impuso definitivamente al finalizar el período cardenista (1934-1940).

La lógica y las necesidades del sistema económico mexicano de industrialización sustitutiva de importaciones, han hecho que las demandas de unos grupos sociales se vean sistemáticamente privilegiadas frente a las de otros. Los grupos sobre los que más ha pesado el control político han sido, desde luego, los campesinos, seguidos por los obreros y el resto de los asalariados. Las demandas de los sectores propietarios, sobre todo las de aquellos que constituyen el sector moderno y dinámico de la economía, han recibido la mayor atención. La lógica de esta jerarquización da la propia estructura económica y la capacidad de los distintos grupos de ejercer presiones sobre la autoridad política cuando sus demandas son relegadas. Tal y como está estructurada la economía mexicana, los instrumentos de defensa del gran capital son notablemente superiores a los del resto de los grupos sociales; estos instrumentos van desde la corrupción hasta la posibilidad de crear un ambiente de crisis económica, como bien se demostró durante los momentos de fricción entre los gobiernos de Adolfo López Mateos o Luis Echeverría y algunos grupos empresariales importantes. En cambio, las posibilidades de presión de los campesinos son mucho más limitadas.

Los medios que el Estado mexicano emplea para hacer que prevalezcan sus decisiones sobre los miembros de la sociedad civil también varían según la posición estratégica de los actores. La violencia es usada con relativa mesura, pero cuando se emplea generalmente se ejerce contra quienes se encuentran al fondo de la pirámide social. Muy raras veces se ha empleado contra los empresarios y, en todo caso, han sido instancias aisladas.

Las estructuras centrales del sistema político actual surgieron cuando México era básicamente una sociedad agraria, prácticamente sin una burguesía industrial propia y con un proletariado y una clase media relativamente pequeños. En 1940 sólo el 20% de la población fue clasificada como urbana y poco más del 63% de la fuerza de trabajo estaba dedicada a actividades agropecuarias. De entonces a la fecha los cambios han sido rápidos y profundos. En la actualidad casi la mitad de los mexicanos viven en zonas urbanas y más del 60% está dedicado a actividades no agropecuarias. Lo notable es por lo tanto, que a pesar de transformaciones tan significativas en la base social, los mecanismos de participación y control políticos no hayan sufrido ningún cambio importante. Los rasgos autoritarios son tan fuertes ahora como entonces. La "clase política" se renueva incesantemente pero no así sus métodos. Su monopolio político parece hoy tan fuerte como en el pasado. Las concesiones

hacia la oposición han sido mínimas y no han perseguido otro objetivo que el de evitar una erosión de su legitimidad. Los líderes del PRI se preparan, según sus propias declaraciones, para recibir al año 2000 con la confianza de quien sabe que su poder está asegurado, pero ¿hay bases para tal seguridad?

Por el momento la oposición se encuentra débil y fragmentada. No hay alternativa evidente frente al dominio del partido oficial. A la vez, tampoco cabe duda de que las bases sociales en las que está montada la maquinaria política actual van a seguir cambiando, y quizá a una velocidad mayor que en el pasado. Es aquí en donde se puede vislumbrar una posibilidad de cambio, aunque su dirección y resultados son muy nebulosos.

México se aproxima al final del siglo XX con un gran potencial como exportador de petróleo y sus derivados. La crisis mundial de energéticos ha revaluado extraordinariamente la importancia de reservas de hidrocarburos. En principio, el proyecto oficial se propone devolver a México su carácter de exportador de petróleo —carácter que perdió a raíz de la expropiación de 1938— y emplear las divisas así generadas para revitalizar el proceso de crecimiento económico, mismo que hace apenas unos años parecía haber llegado a un callejón sin salida. El *boom* petrolero puede desatar presiones inflacionarias de gran envergadura y llevar a ahondar las graves distorsiones de la economía, o puede sacar adelante el proyecto industrializador y modernizador; en cualquier caso, va a dejar una profunda huella en la sociedad y a generar nuevas y fuertes presiones sobre la estructura política. Un proceso inflacionario fuera de control, por ejemplo, llevaría a la masa asalariada a presentar demandas que podrían rebasar a la actual estructura sindical, clave del sistema de control político, como lo ha señalado bien Labastida. Una profundización en la industrialización, al modernizar al país, socavaría inevitablemente una de las bases tradicionales de apoyo del régimen: los campesinos y sectores marginales del mundo urbano. Los pocos análisis de que disponemos sobre la conducta electoral en México ponen de manifiesto que las corrientes antagónicas al dominio del partido oficial encuentran su máxima expresión en los centros urbanos más grandes e industrializados, y, dentro de estas ciudades, en las zonas de clase media. Y la importancia de estos sectores tenderá a aumentar en la medida en que México se adentre en el proceso de desarrollo industrial.

A manera de conclusión, conviene recordar que los grandes sacudimientos sociopolíticos mexicanos —la Independencia y la Revolución de 1910—, tuvieron lugar precisamente después de períodos más o menos prolongados de auge económico, que generaron la consolidación de nuevos grupos, así como expectativas y demandas que las estructuras políticas vigentes no pudieron enfrentar. La historia no tiene necesariamente que volverse a repetir, pero el mayor reto para el autoritarismo benévolo mexicano está por venir.